

Pronunciamento de la Defensoría de los Habitantes en el Día

Internacional contra la corrupción: 09 de diciembre

## **La corrupción agrava la pobreza e incrementa la desigualdad**

La Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, proclamó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Esta declaración está motivada en el interés de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, teniendo en cuenta la perspectiva internacional y sobre todo los esfuerzos que los distintos países pueden aportar y compartir para combatir y prevenir este flagelo.

Cualquier iniciativa de esta naturaleza debe inspirarse en la construcción de espacios de acción de actores clave para retomar y fortalecer una cultura de transparencia, de prevención y probidad, cuyas bases deberán estar directamente relacionadas con los principios de equidad, libertad, solidaridad y justicia, pues este fenómeno agrava la pobreza y acrecienta la desigualdad entre las personas.

En este tema debemos advertir que esta es una de las mayores responsabilidades de la sociedad y se necesita un especial liderazgo desde el Estado, desde la sociedad civil, la academia, medios de comunicación y el sector productivo. La corrupción afecta la acción del Estado para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos a la educación, la inversión en salud, infraestructura, empleo, la economía las finanzas, etc., y eso tiene relación directa con la calidad de vida y la confianza en las instituciones democráticas. De ahí que la acción colectiva debe elevarse a sus niveles más altos para que los recursos se utilicen en su mejor uso alternativo.

Tómese en cuenta que la ONU advierte que la corrupción amenaza la democracia y el desarrollo. Desde 1993, la Declaración de Viena señaló que la democracia, el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes. Los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas han constatado que muchos países no pueden cumplir con sus obligaciones de derechos humanos por los problemas que genera la corrupción.

La corrupción limita la posibilidad de las instituciones del Estado de “tomar medidas” para utilizar todos los recursos disponibles para avanzar de manera progresiva en el pleno cumplimiento de derechos económicos sociales y culturales. Se ha evidenciado que cuando la corrupción afecta los servicios de salud, educación y la seguridad social, se genera una afectación a múltiples derechos de las poblaciones que ya de por sí, por su condición social, se encuentra en una situación de ma-



Imagen con fines ilustrativos

por vulnerabilidad.

### **Afectación en todos los campos**

La corrupción también impacta los derechos civiles y políticos. Cuando se toman decisiones políticas velando por intereses particulares y no el bienestar de la sociedad, se deslegitiman las instituciones democráticas frente a los ojos de la ciudadanía y se cercena el carácter representativo del Estado y por lo tanto, los cimientos de la participación política. La corrupción también atenta contra el principio de igualdad, y cuando no se combate de manera adecuada y se genera impunidad, se atenta con el derecho a un recurso efectivo.

Antonio L. Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, expresó que la participación y la cultura cívica son los factores primordiales para lograr un cambio en la sociedad. "Si queremos que las cosas cambien, tenemos que pasar de un sujeto pasivo a un ciudadano activo en las instituciones democráticas".

En nuestro país existen mecanismos técnicos y jurídicos para hacer frente a las causas por las cuales se origina la corrupción. Algunos artículos puntuales de nuestra Constitución Política, la ratificación de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA y la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, así como algún grado de comunicación interinstitucional, nos ofrece posibilidades de éxito.

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la Organización Transparencia Internacional los costarricenses consideran que la corrupción disminuyó levemente del 2013 a 2014, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos no sólo para mejorar nuestra posición en este tipo de mediciones sino -y quizás lo más importante- para generar mayor confianza y desarrollo para mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses.

A pesar de nuestra vasta normativa interna en materia de control interno, administración financiera y presupuestos públicos y otras disposiciones, es importante apostar a la legislación sobre transparencia, todo esto con el propósito de contar con un marco normativo que propicie la evaluación de la gestión de las entidades y los funcionarios, y la rendición de cuentas. Es necesario desarrollar una cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública y eso tiene que ver con una gestión de servicio, en donde es fundamental no sólo cumplir con el principio de legalidad sino también dejar claro cuál fue el resultado de la utilización de los recursos de la colectividad, de acuerdo con los fines y objetivos para la cual se creó la institución y si eso está creando valor social, según la propuesta estratégica de acción institucional.

Necesitamos mayor nivel de compromiso con el concepto de gobernanza, entendiendo por este a la comunicación con la sociedad civil en la creación y ejecución de políticas públicas dirigidas al bienestar colectivo. Asimismo, debemos estar claros en la responsabilidad que significa estar involucrados en la Alianza para el Gobierno Abierto, cuyos postulados se resumen en mejoras en los servicios, mayor transparencia y mejor uso de los recursos.

La Defensoría de los Habitantes considera que la sanción social es una fórmula básica para combatir la corrupción. Atender con prioridad las denuncias sobre este tema permitiría diseñar políticas y crear programas anticorrupción que involucre una política de cero tolerancia. Se trata de hacer una conexión con los habitantes y tejer una relación que exija ser implacable con los corrup-

tos, tomando en cuenta que existen márgenes de impunidad preocupantes.

Desde la Defensoría estamos trabajando en la creación y divulgación de buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, para contribuir a desarrollar esa cultura de probidad y prevención como parte del antídoto en la lucha contra la corrupción.

**Oficina de Prensa**

**Defensoría de los Habitantes**

**Martes 09 de Diciembre de 2014**